

INICIO EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE FONDO

AUTOS: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO 24 DE SETIEMBRE 785
vs. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
s/NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO – EXPTE 53/12

SRES.
EXCELENTÍSIMA CÁMARA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA III

Ángel María García Pinto, DNI 12.622.740, por mi propio derecho, con domicilio real en calle 24 de Septiembre 675 10º Piso Depto B de esta ciudad, y domicilio procesal en el Casillero Digital N° 20-25542403-4 del letrado que me patrocina, a esa Excelentísima Sala respetuosamente digo y pido lo que sigue.

1 – ANTECEDENTES Y TÍTULOS FUNDANTES DE ESTA EJECUCION

A – **El 31/03/2016 V.E. dictó la sentencia de fondo de esta causa**, luego confirmada en casación y ya definitivamente firme. Por ella se condenó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (en lo sucesivo la Municipalidad) *“a arbitrar las medidas necesarias para concretar la confección de un nuevo juego de planos del edificio en altura de calle 24 de septiembre N° 785 o en su defecto que los confeccione la actora a costa de la accionada”*(sic)

B – Oportunamente intimada para que confeccionara los planos, la Municipalidad no respondió. Ante ello, y en el marco de la alternativa que previó la sentencia, el Consorcio actor (en lo sucesivo el Consorcio) pidió autorización para confeccionar los planos por sí, *“a costa de la accionada”*. A tal fin presentó un presupuesto (**\$ 4.173.500, expresados a valores de setiembre de 2019**) el cual, previo traslado a la Municipalidad sin que ésta manifestara oposición, fue aprobado por V.E., autorizándose al Consorcio a contratar la confección de los planos (**decreto del 21/11/2019**).

C - Contando con la autorización judicial, el 13/12/2019 el Consorcio me contrató a mí para que, como Ingeniero Civil que soy, confeccionara los planos del edificio, tarea contratada por la suma oportunamente autorizada por V.E. (\$ 4.173.500), que el Consorcio me pagó íntegramente en el mismo acto mediante la cesión a mi favor del 100% de los derechos y acciones que tiene en esta causa contra la Municipalidad condenada.

D – informada la cesión en el juicio, y previo traslado de ello a la Municipalidad deudora cedida quien no manifestó oposición, **el 11/06/20 V.E. dictó sentencia que dispuso aprobar la cesión** y tenerme a mí *“Ángel María García Pinto, D.N.I. 12.622.740, como cesionario del 100% de los derechos y acciones que le corresponden en autos a la parte actora Consorcio de Propietarios*

Edificio 24 de Septiembre 785, por ejecución del punto III de la sentencia firme de fecha 31-3-16" (sic).

E – Por mi parte dí pleno cumplimiento a la tarea profesional que me encomendara el Consorcio confeccionando los planos del edificio en un número total de 16 (dieciséis), de los cuales 7 (siete) corresponden a Obra Construida) y 9 (nueve) corresponden a Subdivisión por Propiedad Horizontal. Los mismos ya han sido presentados en la causa por el propio Consorcio actor, beneficiario de mi trabajo profesional.

F – Como expresé más arriba, las acciones y derechos cedidos a mi persona se traducen en la suma total de **\$ 4.173.500 (pesos cuatro millones ciento setenta y tres mil quinientos), expresados a valores de septiembre de 2019,** según da cuenta la sentencia precitada. Tal la suma que, en el marco de la ejecución de la sentencia de fondo, le reclamo a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con más los intereses y demás acrecidas que correspondan desde el primer día de mora hasta el día del efectivo y total pago de la deuda.

2 – LA NATURALEZA ALIMENTARIA DE MI CRÉDITO

Aunque es obvio y consta en autos, es del caso resaltar que la suma que ejecuto me corresponde en concepto de honorarios profesionales por los servicios que le presté al Consorcio actor como Ingeniero Civil que soy, consistentes en la confección de los planos del edificio. Por ende, aunque no se trata de honorarios regulados a un abogado interviniente en el juicio, son equivalentes a ellos en cuanto a su naturaleza alimentaria. Pido que esto se tenga presente en el marco de esta ejecución de la sentencia de fondo.

3 - PLANTEO INCONSTITUCIONALIDAD

En prevención de la eventual oposición y/o excepción que pudiere formular el municipio ejecutado, solicito que se declare la inconstitucionalidad de la Ley nº 8851 y su Decreto Reglamentario 1538/1-FE-2016, como asimismo la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal nº 4793 del 28/04/2016 (mediante la cual la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se adhirió a las disposiciones de la precitada Ley nº 8851), del Decreto Municipal nº 4272 del 07/12/2016, y de cualquier norma otra complementaria o modificatoria de las mismas que se dictare hasta que se resuelva esta articulación, que dispusiere la emergencia económica y/o la inembargabilidad de las rentas del municipio accionado. Dejo planteada la inconstitucionalidad de dichas normas en mérito de las siguientes consideraciones:

3.A – LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY N° 8851

En la causa “*Álvarez, Jorge Benito y otros s/ prescripción adquisitiva*”, al tratar un planteo referido a la validez constitucional de la ley N° 8.851, nuestro Máximo Tribunal Provincial reafirmó el carácter alimentario de los honorarios profesionales y sostuvo también que la fecha de su cobro no puede quedar sujeta a una pauta que sólo se atiende estrictamente a la antigüedad de la planilla firme, sin tomar en consideración una situación especial como la naturaleza alimentaria de la acreencia.

De allí que la ausencia de un tratamiento diferenciado al que la ley N° 8.851, y su Decreto Reglamentario N° 1583/1(FE)-2016 someten a las deudas del Estado, sin aprehender una circunstancia atendible como la de marras, conduce indefectiblemente al resultado disvalioso de que, en la práctica, se vean satisfechas primeramente obligaciones que no participan de las condiciones necesarias para merecer un despacho preferente, en desmedro de otras -como la que nos ocupa-, que sí ostentan tales características (cfr. sentencia n° 1680 del 31/10/2017, dictada en los autos “*Álvarez, Jorge Benito y otros s/ prescripción adquisitiva*”).

De acuerdo con la doctrina que emana de la sentencia aludida, se sentó como criterio que ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley n° 8851 (“*Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva*”), del art. 2 del Decreto n° 1583/1(FE)-2016, y del art. 2 de la precitada Ley n° 8851 (en cuanto consagra la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público).

En definitiva, la prolongación de la espera presupuestaria para la particular situación de autos, en donde al crédito alimentario que pertenece al letrado se le pretende imponer una cerril clausura indiferenciada que no reconoce ninguna alternativa de pronto y preferente pago, resulta lesiva y violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad ante la ley (arts. 16, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) que impiden que por una dilación excesiva el crédito alimentario resulte burlado en los hechos (*cfr Sala II de este fuero en sentencia N° 406/17 dictada en los autos: Paz Posse de Molina, Elvira de Lourdes vs Provincia de Tucumán s/ contencioso administrativo*).

Sostengo, Excelentísima Sala, que la doctrina que emana de los fallos citados es plenamente aplicable al presente caso, en tanto no se encuentra acreditado en el sub lite que el municipio ejecutado, al momento de adherirse a este régimen, haya realizado alguna modificación o reserva en el sentido de prever la preferencia de cobro cuando el crédito reúne alguna condición que merezca un tratamiento diferenciado (vgr. carácter alimentario). Pido se tenga presente.

En igual sentido se expidió esta Sala III de la Excma. Cámara al analizar la constitucionalidad de la ley n° 8851 en ocasión de analizar su aplicación en el orden municipal (*cfr. "Manson de Martilotti vs Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Contencioso Administrativo expte n° 26/14, sentencia n° 171 del 13/04/2018*) como así también en el propio ámbito provincial (*cfr. "Palomar, Felipe Mario vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/Amparo", expte n° 787/14, sentencia n° 674 del 14/11/2017; "Salvatierra, José Lucas vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo, expte n° 307/14, sentencia n° 682 del 23/11/2017", entre otras*).

Amén de los argumentos centrales expuestos en los párrafos precedentes, resulta a todas luces evidente que la Provincia (y la Municipalidad capitalina, en cuanto adherente), pretende mediante esta nueva normativa compurgar la inconstitucionalidad ya hartamente declarada en casos análogos al sub-lite de la Ley 8228 y sus anteriores predecesoras y prórrogas hasta llegar a la Ley 9068 y cctes., que no han hecho otra cosa que dar una casi ya "perpetuidad" a la declamada emergencia haciendo de tal suerte caso omiso a la condición de "temporalidad y razonabilidad" de que deben estar dotadas las leyes de emergencia para ser válidamente consideradas como tales.

Se pretende una vez más mediante las normas que cuestiono que el municipio condenado goce de la inejecutabilidad de sus condenas judiciales y de la inembargabilidad de sus fondos, conculcando de tal suerte derechos y garantías arraigadas en nuestra Ley Fundamental no sólo nacional sino también provincial, como ser entre otros, los artículos 17, 19, 28, 31, 75 inc. 12, 126, etc., toda vez que pretende pulverizar y convertir en letra muerta en este caso concreto, mi derecho irrevocablemente adquirido a cobrar honorarios en virtud de la sentencia de fondo recaída en autos, que debe cumplirse, ya que de no entenderlo así, se tornaría en un acto jurisdiccional meramente declarativo, carente de sentido y contenido y atentaría además contra las bases del estado republicano, siendo que el poder ejecutivo, en connivencia con el poder legislativo, pretenden dejar sin efecto las sentencias y directrices dictadas por este órgano judicial de contralor.

Resulta innecesario recalcar nuevamente que conforme a lo dispuesto por el art. 31 de nuestra Carta Magna, el régimen estatuido por el código de fondo prevalece sobre las leyes provinciales y este último ordenamiento establece la posibilidad de

que las personas jurídicas, entre las cuales se encuentra el municipio accionado “pueda ser demandado por acciones civiles y hacerse ejecución de sus bienes”.

El municipio no puede eludir el pago de sus obligaciones mediante las normativas que cuestiono, por cuanto violentaría además lo dispuesto por el código de fondo, que como es sabido acuerda al acreedor la facultad de emplear los medios necesarios para el lleno de tal cometido y que no es otra cosa de que pueda perseguir la ejecución de los bienes de su deudor.

La legislación citada por el estado provincial no es más que una postergación solapada o encubierta de las anteriores, ya que si bien no se vale del término “prórroga”, de su contexto no puede inferirse otra cosa, toda vez que, de hecho, constituye una postergación y nada impide que esto se repita una y otra vez hasta el infinito.

No otra cosa es lo que pretende esta nueva ley. No puede el Estado por medio de ella ni ninguna otra postergar irrazonable y constantemente el cumplimiento de obligaciones que emanan de derechos adquiridos - especialmente los alimentarios - y terminar decidiendo por sí mismo cuándo y cómo pagar. Justamente esto es lo que se pretende en la especie con el mecanismo de pago que dan cuenta los arts. 4 y 5, mediante los cuales se implementa la elaboración de un “registro de acreedores” y la posibilidad de “elaborar propuestas de pago con los recursos necesarios”.

La administración, de convalidarse las leyes que tacho como repugnantes a la Constitución Nacional, al no determinar con precisión la fecha de pago, implica introducir, como lo vino haciendo en las anteriores leyes de emergencia una condición puramente potestativa, al dejar supeditada a su sola voluntad la fecha de cumplimiento de la obligación.

Es decir que mediante una inconstitucional delegación en el Poder Ejecutivo, las leyes atacadas dejan librada a la voluntad de la Provincia deudora (o en este caso el Municipio accionado en autos) el cumplimiento de sentencias judiciales.

De validarse su eficacia constitucional –supuesto en el que me coloco al sólo efecto de la argumentación- las sentencias firmes dictadas por el órgano jurisdiccional se tornarían en una simple "autorización para registrarse como acreedor", pues sin ella no podría iniciarse el procedimiento ante el Ejecutivo (art. 4º).

En tales condiciones, la ley resulta repugnante a la Carta Magna, pues violenta las garantías de la propiedad, la defensa en juicio y el juez natural (arts. 17 y 18, C.N.). La Administración se convierte en el exclusivo "juez" de la oportunidad para el cumplimiento de los actos jurisdiccionales –avasallando así en su esencia el art. 109 de la Constitución Nacional-

sustrayéndose al cumplimiento de sus obligaciones, y determinando por sí y ante sí cuándo las cumplirá. En otras palabras, el Estado se está colocando al margen del orden jurídico.

Tengo la absoluta convicción de que los miembros de esta Excelentísima Sala no van a apartarse del precedente de la Excma. Corte que en su actual composición, ha declarado la invalidez constitucional de la emergencia económica e imposibilidad de que no se embarguen las cuentas de la Provincia y/o del Municipio, cuando el crédito tiene naturaleza alimentaria como es el caso que ahora nos ocupa.

En síntesis, la percepción de mis honorarios profesionales aprobados por sentencia firme en el presente proceso se tornarían ilusorios o de cobro incierto en el tiempo, si se declarasen constitucionales la ley 8851 y del decreto 1538/18228 relativas a la inembargabilidad de los fondos de la Provincia, como asimismo las normas por las cuales el Municipio accionado adhirió a este régimen.

Basta con analizar el desarrollo de la historia legislativa en Tucumán para advertir que **este estado de emergencia será prorrogado indefinidamente** y el capital reclamado jamás llegarán a ser percibidos, puesto que las leyes dictadas en el marco de la supuesta emergencia pública no son más que argucias de quienes están en el poder para no cumplir con sus obligaciones y ceder el problema a quienes los sucedan en el mandato.

Por lo expuesto, solicito se haga lugar al planteo formulado por el suscripto por su propio derecho, y en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad, para el caso, de los artículos 2 y 4, último párrafo, de la Ley n° 8851 y, en consecuencia, de la Ordenanza Municipal N° 4793/2016, que adhiere a tal normativa, y del Decreto Municipal n° 4272 del 07/12/2016, artículo 1, y de toda otra norma modificatoria o complementaria de las mismas que se dictare hasta tanto este planteo se resuelva, y que impida de alguna manera la percepción de mi legítima acreencia alimentaria, y en el pedido de dar curso a la presente ejecución de sentencia y a derecho de solicitar oportunamente un embargo ejecutivo por las sumas adeudadas al suscripto por honorarios. Pido se tenga presente.-

3.B – LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE EMERGENCIA N° 8.228 Y SUS PRÓRROGAS

Si bien en reiterados pronunciamientos la Excma. Sala declaró la inconstitucionalidad tanto de la Ley 8851 como de la Ley 8228 y sus prórrogas, un nuevo examen de la cuestión, a la luz del sentido del voto del Dr. René Mario Goane en sentencia N° 742 del 12-06-2017 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, en los autos "*Arce Leandro vs. Provincia de Tucumán s/ Especiales (Residual). Desalojo*", nos lleva a concluir que el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad referido a la Ley n° 8228

y sus prórrogas, incluida la Ley n° 9068 deviene inoficioso, por cuanto han perdido actualidad y no se aplican al presente caso.

Ello en razón que el procedimiento de pago que rige para dar cumplimiento a un pronunciamiento judicial firme que condene al Estado Provincial o Municipal al pago de una suma de dinero, se encuentra previsto en la Ley n° 8851 y su Decreto Reglamentario N° 1583/1(FE), que constituyen un régimen permanente sobre la materia, cuya inconstitucionalidad se declara en los presentes actuados.

En este sentido se pronunció recientemente la Sala I de esta Excma. Cámara del fuero en sentencia N° 180 del 03/04/2019 dictada en el expte n° 343/13, caratulado: *"S.A. Azucarera Argentina C.E.I. vs Provincia de Tucumán s/ Nulidad / Revocación"*, como así también lo hizo esta Sala III en la sentencia N° 232 del 22/04/2019, pronunciada en el expte. N° 167/16, caratulado *"Alderete, Daniel Eduardo vs. Provincia de Tucumán D.G.R.- s/ Inconstitucionalidad"*.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y para el hipotético caso de que V.E. no compartiere el criterio vertido en los párrafos precedentes, dejo expresamente a planteada la inconstitucionalidad de las leyes nros. 8228, 8358, 8753, 8826, 9068, – Emergencia Económica-, asimismo la Ordenanza Municipal n° 3049/03, y la de toda otra norma relativa a la materia, ya sea modificatoria, complementaria o concordante con las citadas precedentemente, promulgadas por la Provincia y a las que adhirió el Municipio accionado, ordenando la suspensión de las ejecuciones de sentencia firmes coma así también la inembargabilidad de sus bienes.

Fundo tal planteo en las mismas líneas argumentales vertidas en el incido a) del presente planteo. A los mismos agrego como fundamento, que los municipios carecen de potestades constitucionales para suspender los procesos judiciales, cuya regulación compete en forma exclusiva a la Legislatura de la Provincia (artículo 67, inciso 21 de la Constitución Provincial del 26/06/06). Excma. Cámara Contencioso Administrativo Sala I, autos: *"Andar S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Inconstitucionalidad"*. Expte. n° 434/99.

En mérito a ello la declaración de inconstitucionalidad de las leyes provinciales se expande a las normas municipales que regularon las emergencias dispuestas en los respectivos municipios. En lo referido a la suspensión de las ejecuciones de sentencias judiciales establecida en el artículo 3º de la Ordenanza Municipal n° 3049/03, deviene inconstitucional por los argumentos ya vertidos.

Pido se tenga presente.-

4 - PETITUM

Por todo lo expuesto, a V.E. pido:

- 1) Me tenga por presentado, con el domicilio legal constituido y por iniciada la presente ejecución de sentencia,
- 2) Por planteada formalmente la inconstitucionalidad de la Ley nº 8851 y su Decreto Reglamentario nº 1538/1-FE, la Ordenanza nº 4793, el Decreto Municipal N° 4.272 del 07/12/2016, y la de toda otra norma relativa a la materia, ya sea modificatoria, complementaria o concordante con las citadas precedentemente, promulgadas por la Provincia y/o por Municipio accionado, solicitando se corra traslado al mismo por el término de ley,
- 3) Por planteada expresamente la inconstitucionalidad de leyes nros. 8228, 8358, 8753, 8826, 9068, – Emergencia Económica-, asimismo la Ordenanza Municipal nº 3.049/03, y la de toda otra norma relativa a la materia, ya sea modificatoria, complementaria o concordante con las citadas precedentemente, promulgadas por la Provincia y/o por Municipio accionado, solicitando se corra traslado al mismo por el término de ley,
- 4) Se proceda a intimar de pago a la accionada, del importe del capital reclamado, con más la suma que se justiprecie provisoriamente para responder por acrecidas,
- 5) Se haga conocer a los ejecutados que tales actos procesales importan la citación de remate a los efectos de ley, para que en el perentorio término de cinco días oponga las excepciones legítimas que tuviere, bajo apercibimiento de llevarse adelante la presente ejecución,
- 6) Oportunamente se dicte sentencia, ordenando llevar adelante la presente ejecución de sentencia hasta hacerse íntegro pago de todos los rubros reclamados, con expresa imposición de costas,
- 7) Asimismo, se recepten favorablemente los planteos de inconstitucionalidad incoados, con expresa imposición de costas,

JUSTICIA.